

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.**

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 27.084, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Union Eléctrica, S. A.», con domicilio en Soto de la Barca, Tineo, solicitando autorización y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Interconexión a 50 KV. entre la central hidráulica de La Florida y la central térmica del Narcea, consistente en el paso, a 50 KV., de la línea existente preparada para esa tensión, actualmente a 15 KV.; instalación de un centro de transformación de 10.000 KVA., 50/3,15 KV., en la central térmica del Narcea, y protecciones adecuadas de las salidas y llegadas de línea.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1966; Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales, de 23 de febrero de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.  
Declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 18 de febrero de 1971.—El Delegado provincial, por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Ambrosio Rodríguez Bautista.—624-B.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

**ORDEN de 30 de enero de 1971 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Villanueva de las Peras, provincia de Zamora.**

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Villanueva de las Peras, provincia de Zamora, en el que no se ha formulado reclamación alguna durante su exposición pública, siendo favorables todos los informes emitidos en relación con la misma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.º al 3.º y 5.º al 12 del Reglamento de Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Concentración Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962; la Orden comunicada de 29 de noviembre de 1962, en relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del Departamento, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Villanueva de las Peras, provincia de Zamora, por la que se declara existen las siguientes:

Colada de Litos.—Anchura, ocho metros.  
Colada de Villanueva a la Colada de Litos.—Anchura, ocho metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de las vías expresadas figuran en el proyecto de clasificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Eugenio Fernández Cabezon, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

Segundo.—Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia, para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I. muchos años.  
Madrid, 30 de enero de 1971.—P. D., el Subsecretario L. García de Oteyza.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

**ORDEN de 13 de febrero de 1971 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Rosell, provincia de Castellón.**

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Rosell, provincia de Castellón, en el que no se ha formulado reclamación alguna durante su exposición pública, siendo favorables todos los informes emitidos en relación con la misma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.º al 3.º y 5.º al 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del Departamento, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rosell, provincia de Castellón, por la que se declara existen las siguientes:

### Vías pecuarias necesarias

«Cañada real de Azagador».—Anchura, 75,22 metros.  
«Vereda de Canet a Cenia».  
«Vereda de los Moletes».

Estas dos veredas con una anchura de 20,89 metros.

El recorrido, dirección y demás características de las vías expresadas figuran en el proyecto de clasificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Ricardo López de Merio, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 2.º del Reglamento de Vías Pecuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse su deslinde.

Segundo.—Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 13 de febrero de 1971.—P. D., el Subsecretario, L. García de Oteyza.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

## MINISTERIO DEL AIRE

**ORDEN de 2 de febrero de 1971 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.**

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre don Joaquín Peinado García, Brigada del Cuerpo de Suboficiales Especialistas de este Ejército, como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, sobre impugnación de resoluciones de este Ministerio de 11 de enero y 14 de noviembre de 1968, relativa a percepción de trienio, se ha dictado sentencia con fecha 21 de enero de 1971, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín Peinado García, debemos anular y anulamos, por no ser conformes a derecho, las resoluciones recurridas de once de enero y catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, declarando en su lugar el derecho del actor a que se rectifique la fecha inicial de su sexto trienio, fijándola al día uno de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, partiendo de la de veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y ocho, en que ingresó como obrero militarizado al servicio del Estado, según reconoció la resolución de veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y tres; sin especial declaración sobre costas»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 2 de febrero de 1971.

SALVADOR

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

*ORDEN de 2 de febrero de 1971 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo entre «Entreprise Bourdin y Chausse, S. A.», y don Luis Díaz Losada, como demandantes, y la Administración General del Estado, como demandada, contra resolución de este Ministerio de 16 de noviembre de 1967, sobre indemnización, se ha dictado sentencia con fecha 30 de noviembre de 1970, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «Entreprise Bourdin et Chausse Société Anonyme pour la Construction et Entretien des Routes» (S. A. C. E. R.) y don Luis Díaz Losada contra acuerdo del Ministerio del Aire de 16 de noviembre de 1967, denegatoria del recurso de alzada contra acuerdo de la Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de Aviación Civil de 30 de agosto anterior, en el mismo año, que no dió lugar a la pretensión de indemnización por concepto de modificación de plan de trabajo y cantidad de 15.824.033 pesetas, ni tampoco a la petición de indemnización por concepto de obstaculización administrativa en la ejecución de la obra por 12.490.229,09 pesetas, debemos declarar y declaramos la nulidad de tales actos administrativos, reponiendo el expediente al momento inmediatamente anterior a dictar la resolución ministerial para que, previamente a ella, se emita el preceptivo informe de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, sin que haya lugar a producirse sobre las demás pretensiones de la demanda, sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 2 de febrero de 1971.

SALVADOR

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

*ORDEN de 2 de febrero de 1971 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre don Luis Caballero González y otros, como demandantes, y la Administración General del Estado, como demandada, sobre impugnación del Decreto número 807/1967, de 20 de abril, del Ministerio de Hacienda, por el que se asignan los coeficientes multiplicadores a los distintos Cuerpos de funcionarios civiles de la Administración Militar, se ha dictado sentencia con fecha 15 de enero de 1971, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos en nombre de don Luis Caballero González, doña María del Pilar Rodríguez Odriozola, doña Rosa Senén Hidalgo de Cisneros don Juan Mariano Casado Roldán, don Isabelo Molina Recio y doña María de la Encarnación García del Busto Alegret, debemos declarar y declaramos ajustados a derecho el Decreto 807/1967, de 20 de abril, y los actos administrativos impugnados conjuntamente en la demanda; sin expresa declaración sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 2 de febrero de 1971.

SALVADOR

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

## MINISTERIO DE COMERCIO

*ORDEN de 22 de enero de 1971 sobre transferencia de una concesión de un parque de cultivo de ostras sito en el río Piedras.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia de doña Angeles Díez Ortiz, en el que solicita la autorización oportuna para poder transferir la concesión de un parque de cultivo de ostras, sito en el río Piedras término municipal de Lepe, Distrito Marítimo de Isla Cristina, concedido por Orden ministerial de 23 de septiembre de 1968 («Boletín Oficial del Estado» número 243):

Considerando que en la tramitación del expediente se han verificado cuantas diligencias proceden en estos casos, y que además ha sido acreditada la transmisión de la propiedad del parque de cultivo mediante el oportuno documento de compraventa,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, y de conformidad con lo señalado en la norma 27 de la Orden ministerial de 25 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 91), ha tenido a bien acceder a lo solicitado y, en su consecuencia, declarar concesionario del referido parque de cultivo a «Ostrimar, S. A.», en las mismas condiciones que las expresamente consignadas en la Orden ministerial de concesión.

La mencionada Sociedad se subroga en el plazo, derecho y obligaciones del anterior concesionario, así como viene obligada a observar las disposiciones en vigor sobre esta materia y las que puedan dictarse en lo sucesivo.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II muchos años.  
Madrid 22 de enero de 1971.—P. D. el Subsecretario de la Marina Mercante, Leopoldo Boado.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director general de Pesca Marítima.

*ORDEN de 22 de enero de 1971 por la que se autoriza el cambio de dominio, por herencia, de una cetería, denominada «Arenillas», en Islares (Santander)*

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Javier Irigoyen Jiménez, en el que solicita el cambio de dominio, por herencia, de una cetería, denominada «Arenillas», en Islares (Santander), de la que era titular su fallecido abuelo don Juan Jiménez Sierra:

Considerando que en la tramitación del expediente se han verificado cuantas diligencias proceden en estos casos, y que, además, ha sido acreditada la transmisión de la referida cetería, mediante la oportuna copia simple notarial del testamento otorgado por el finado,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, y de conformidad con lo señalado en la norma 27 de la Orden ministerial de 25 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 91), así como la manifestación expresa de que el cambio de dominio se efectúa a nombre de Francisco Javier Irigoyen Jiménez y demás herederos de don Juan Jiménez, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y, en su consecuencia, declarar concesionario de dicha cetería a Francisco Javier Irigoyen Jiménez y demás herederos de don Juan Jiménez, en las mismas condiciones que las expresamente consignadas en la Orden ministerial de concesión, así como de-